

Enero de 1869, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, falla con las siguientes proposiciones:

1ª: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. José M. Brambila, por no haberse violado en su contra la garantía constitucional que consigna el art. 16 de la Constitucion general, por las autoridades judiciales del Estado.

2ª: Notifiquese esta sentencia; publíquese en el periódico oficial del Estado y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.
—D. I. Trejo.—G. J. Gallegos.

Es copia. Guadalajara, Enero 5 de 1874.
—G. J. Gallegos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México; Enero 28 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por el C. José María Brambila, por sí y en representacion de D^a Luisa Cisneros y sus menores hijos, contra la 5ª Sala del Supremo Tribunal de dicho Estado, que conoce del recurso de súplica entablado en un negocio del órden civil por el solicitante, alegando la violacion en su persona del art. 16, por ser incompetentes los Tribunales de Jalisco, en razon de no estar nombrados popularmente, con infraccion del art. 109 de la Constitucion; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: que conforme al art. 36 de la Constitucion particular del Estado de Jalisco, la Legislatura del mismo debe nombrar á los miembros del Tribunal Superior de Justicia, prescripci6n que en nada se opone á las prescripciones del pacto federal que invoca el quejoso, por cuyo motivo tampoco es admisible la tacha de ilegitimidad y de incompetencia opuesta al Tribunal, por

la circunstancia de no haber sido electo popularmente.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—José María del Castillo Velasco.—Simón Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia. México, Octubre 7 de 1874.—
Enrique Landa.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por varios ciudadanos, contra los procedimientos del C. Recaudador de la contribucion extraordinaria impuesta por la Legislatura de ese Estado, en su decreto número 47, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

I

Preliminares.

El Administrador de correos, encargado de llevar la voz fiscal en el presente negocio, dice: que en fines de 1873, la Administra-

ción pública del Estado se encontró con un *déficit* en las rentas de su cargo. La Legislatura del mismo Estado cubrió en parte ese *déficit*, autorizando al Gobierno para que pidiera anticipadas las contribuciones ordinarias que correspondían á los meses de Febrero y Marzo de este año, resultando de aquí forzosamente, que como el *déficit* no se pagó en su totalidad, y como para cubrir una parte de él, se tomaron los rendimientos del impuesto ordinario en los meses citados, debia aumentar aquel en todo lo que importaron las atenciones del Estado en los mismos meses de Febrero y Marzo del presente año.

De paso debemos advertir, que el año económico de 1873, terminó en el Estado de Durango en 31 de Enero de 1874, á consecuencia de haberse comenzado á cobrar los bimestres de la contribucion, en 19 de Febrero de 1873, época en que finalizó el periodo constitucional extraordinario que siguió inmediatamente al estado de sitio. Por manera, que para satisfacer parcialmente el *déficit* de 1873, se tomaron como he dicho, los recursos que debían destinarse para las atenciones públicas en los dos primeros meses del nuevo año económico, Febrero y Marzo de 1874, con lo cual he notado también, se aumentó el *déficit*, supuesto que quedaban insolutos los gastos del Estado en dichos meses. Hasta el 17 de Marzo último, la Legislatura de Durango no resolvió lo conveniente á su juicio sobre este particular; siendo de advertir que al mismo tiempo que decretó en aquella fecha un arbitrio extraordinario para pagar el *déficit*, expidió el presupuesto de egresos para 1874, y la ley de Hacienda para cubrirlos.

En los antecedentes que forman parte de estos autos, fojas 11, 27 y 28 del cuaderno 2º, constan probados los tres hechos que he referido.

Primero: autorizacion al Gobierno para poder anticipada la contribucion de Febrero y Marzo de 1874.

Segundo: expedicion del decreto 17 de Marzo, número 44, imponiendo un empréstito para saldar el *déficit* que habia resultado en las rentas del Estado.

Tercero: expedicion de las leyes 17 de Marzo, sobre presupuesto de 1874, y arbitrios ordinarios para cubrirlo.

Estas leyes fueron decretadas en Diciembre de 73; pero en virtud de las observaciones que de ellas hizo el Ejecutivo, volvieron á la Cámara, en donde se reprodujeron bajo los números 43 y 45 en la fecha citada, 17 de Marzo.

Posteriormente, en 14 de Abril, la Legislatura derogó su decreto de empréstito, y se fijó en una contribucion extraordinaria para el mismo fin de cubrir el *déficiente* referido, fojas 1º del cuaderno 1º.

II

Introduccion del amparo y suspension de procedimientos.

Expedido el decreto que impone la contribucion extraordinaria, varios contribuyentes creyeron que con él se atacaba una de sus garantías individuales, la de la propiedad; y poniendo luego en ejercicio los derechos que juzgaban les asistian, se dirigieron á V. con el recurso de amparo, pidiéndole que inmediatamente mandara suspender los procedimientos de cobranza del impuesto y que en seguida les acordara el amparo.

Los procedimientos fueron suspendidos por V. sin la sustanciacion previa del artículo, y sin oír la voz del fiscal. Por esto no pude entonces emitir mi juicio en este respecto, juicio erróneo tal vez; pero que habria sido contrario á la resolucion del Juzgado, ya porque no veia peligro alguno en la continuacion de los procedimientos, ya porque siempre he creído de mayor importancia el perjuicio que resiente la Administración, y por consiguiente la sociedad paralizandole la marcha pública de aquella por falta de recursos; que la cobranza de un impuesto injusto, excesivo y arbitrario si se

quiere; pero cuya devolucion no era imposible mas adelante, de parte del Estado, si acaso en definitiva se acordaba el amparo que por la imposicion de tal impuesto se pidiera.

Ademas, el Juzgado mandó suspender toda clase de procedimientos, aun los del embargo ó seguro de los bienes de los contribuyentes, siendo así que en casos de esta naturaleza está ya resuelto por la superioridad, si no me equivoco, que la suspension del cobro de un impuesto no puede comprender el embargo preventivo que por las leyes fiscales está concedido á la Hacienda pública.

Sin embargo de esto, entiendo yo que el Juzgado ha podido suspender toda clase de procedimientos en el presente negocio, supuesto que para ello lo autoriza la ley que reglamenta esta clase de juicios, si bien esa autorizacion está concedida para hacer uso de ella bajo la responsabilidad del Juzgado. Toca pues al Superior la calificación de ese hecho de V.

III

Primer fundamento del amparo.

Son tres á mi juicio, los fundamentos del amparo: Primero: falta de competencia en la Legislatura. Segundo: ocupacion de la propiedad sin el consentimiento de su dueño. Tercero: falta de justificación en el impuesto.

Los que han entablado el recurso, invocan para establecer lo primero, el artículo 49 de la Constitución del Estado, que textualmente dice así: "Son facultades de la Legislatura.....6º: Aprobar el presupuesto y decretar contribuciones para cubrirlo. En el primer periodo de sesiones, aprobará el presupuesto de gastos para el año siguiente; y en el 2º examinará las cuentas de los erogados en el anterior."

Facultad de la Legislatura, dicen los quejosos, es sin duda la de decretar contribuciones para cubrir el presupuesto; pero

esa facultad solo puede ejercerla en un tiempo dado y por una sola vez, es decir, en el primer periodo de sus sesiones ordinarias. Ejercerla fuera de ese periodo y mas de una vez, es salirse de la órbita de sus atribuciones constitucionales, es obrar sin la debida competencia, es atentar contra la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución federal, en cuya virtud se previene, que nadie puede ser molestado en su domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente.

La contribucion de que se trata, ha sido decretada en 14 de Abril último, esto es, en el segundo periodo de sesiones de la actual Legislatura, artículo 45 de la Constitución del Estado. Ha sido decretada ademas, cuando ya los Legisladores de 1873, al expedir en 14 de Enero de dicho año la ley de Hacienda para los gastos de 1873, usaron de la facultad constitucional, decretando contribuciones para cubrir ese presupuesto. Por lo mismo, terminan los quejosos, la contribucion es atentatoria de la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución federal.

Ciertos son los hechos citados ¿pero donde está mandado que la Legislatura no puede decretar contribuciones para cubrir el presupuesto, sino en el primer periodo de sus sesiones? ¿Donde está tampoco la prevencion de que un Congreso no puede ocuparse de saldar el presupuesto del Estado, solamente porque ya el Congreso anterior decretó los arbitrios que creyó suficientes para pagar la totalidad de los egresos?

Primeramente, el artículo 49 citado, previene, sí, que en el primer periodo de sesiones se apruebe el presupuesto; pero de ninguna manera limita á ese mismo periodo la facultad de decretar contribuciones para atender á los gastos del presupuesto.

La facultad es general, es absoluta, es la de aprobar el presupuesto y decretar contribuciones para cubrirlo; y aunque después

en el mismo artículo se restringe lo relativo á gastos, ó sea al presupuesto, considerando precisamente el que esta materia no se este tocando con repetición, porque refluiría en perjuicio de los que habian de contribuir para la solución de los gastos que así se estarían decretando constantemente; no sucede lo mismo en cuanto á la facultad de imponer las contribuciones, la cual queda tan amplia y absoluta como se consignó al principio del artículo, siempre que se trate de cubrir los gastos de un presupuesto acordado según la Constitución.

Protender otra cosa, querer que solo en el primer periodo de sesiones, y solo por una vez, se decreten las contribuciones generales para los gastos de la Administración, es canonizar la infabilidad de los Legisladores, estableciendo que su ley de Hacienda para cubrir el presupuesto de egresos, ha de dar matemáticamente los recursos bastantes para el objeto, á tal grado, que si de hecho llega á faltar esa exactitud matemática, y por consiguiente se tiene el déficit, ó el sobrante en las rentas, deben los Legisladores devolver en este segundo caso lo que haya sobrado para los contribuyentes, sin que en el primer caso, que desgraciadamente es lo comun casi en todos los Estados, sea lícito á esos Legisladores el volver á tratar de la materia para saldar los gastos contenidos en el presupuesto general aprobado con anterioridad.

Si se tratara de un nuevo gasto, de un gasto fuera del presupuesto, y á la vez de un nuevo impuesto para cubrirlo, tal vez obraría en toda su fuerza la argumentación de los que han promovido este juicio; pero cuando no se trata de nuevos gastos, sino de los comprendidos en el presupuesto general aprobado ya según la Constitución, pues el de 1873 lo fué en el primer periodo de sesiones de la Legislatura anterior, y cuando al fin del año ó sea cuando ya ha pasado dicho periodo, se ha visto que los arbitrios decretados no fueron suficientes para cubrir aquellos gastos, es muy natural,

es muy justo, que entonces se ocupe el Congreso de poner el remedio á ese mal, decretando los arbitrios que sean necesarios para el objeto, ya sean en la forma de contribución extraordinaria, ya en la de adiciones á la ley general de Hacienda, supuesto que la Constitución no establece que precisamente de tal modo, ó bajo cierta forma, se acuerde la expedición de esos recursos.

El hecho bien conocido y palpable en Durango, es el de que se ha tenido un déficit en las rentas públicas, déficit que ha traído la falta de pago de los empleados en los meses de Noviembre y Diciembre de 1873, Enero, Febrero y Marzo de 1874. ¿Qué se hace con ese déficit? Según los principios de los autores de este amparo, el Congreso nada puede hacer; primero: porque ya se halla fuera del periodo de sus sesiones ordinarias, y segundo: porque ya los legisladores de 1873, decretaron los arbitrios que creyeron suficientes para cubrir el presupuesto del año. Pero el hecho es que los Legisladores se equivocaron; que existe el déficit; que la Administración se disuelve por falta de empleados; que todo se desorganiza y se desquicia. ¿Qué se hace? ¿Qué remedio se pone?

Por mas que yo luché con las ideas contrarias, no las puedo aceptar de grado, ya porque las juzgo verdaderamente disolventes, ya porque en ese art. 49 de la Constitución particular del Estado, no encuentro yo prohibición alguna para que fuera del primer periodo de sesiones, y aun despues de expedida la ley de hacienda, para los gastos del presupuesto aprobado, no se puedan decretar contribuciones extraordinarias ó adicionales de esa misma ley, precisamente para saldar el presupuesto, que aprobado no se ha podido cubrir de otra manera; y aun entiendo mas; porque entiendo que la prevención para tratar del presupuesto en determinado periodo de sesiones, de ningún modo implica prohibición para acordarlo en otro distinto, cuando circunstancias excep-

cionales hayan impedido que se apruebe del todo en el primero.

Esto cabalmente acaba de suceder en el presupuesto y ley de hacienda del Estado, para 1874. Como dije al principio, esas disposiciones fueron acordadas por el Congreso en Diciembre de 1873, todavía en su primer periodo de sesiones; pero observadas por el Ejecutivo cuando ya se había clausurado ese periodo, no volvió á tratarse de ella sino hasta Marzo de este año, época en que la Legislatura se hallaba en el segundo periodo de sus sesiones. Entonces se trató igualmente de *todo* el déficit que se tenía en las rentas públicas, supuesto que, habiéndose anticipado las contribuciones de Febrero y Marzo para cubrir *una parte* del que resultaba en fin de 1873, se encontró aumentado éste con los gastos de la Administración pública en Enero, Febrero y Marzo de 1874, que no estaban cubiertos por lo mismo que se habían tomado los recursos, que de otro modo hubieran servido para el objeto. La Legislatura trató á la vez sobre el presupuesto, ley de hacienda y recursos extraordinarios; y esas tres entidades, que como era natural se produjeron en tres distintos decretos, pero todos de una misma fecha, 17 de Marzo, vinieron á recibir su sanción legal en 18 del mismo mes, que fué cuando los publicó el Gobierno del Estado, fojas 27 y 28 del cuaderno 2º.

Poco despues, el decreto que autorizaba el recurso extraordinario bajo la forma de empréstito, se convirtió en contribucion extraordinaria, habiéndose publicado en 14 de Abril siguiente, cuando todavía se hallaba el Congreso en el segundo periodo de sesiones, fojas 1º cuaderno 1º. Las leyes de hacienda y presupuesto para 1874, así como el decreto imponiendo un arbitrio extraordinario, meramente suplementario de las leyes generales de hacienda, se expidieron pues y se publicaron en el segundo periodo de sesiones de la actual Legislatura. Consecuencia: que si hemos de seguir las ideas de los que piden amparo contra la contri-

TOMO VI.—PARTE II.

bucion, alegando falta de competencia, por haberse dado el decreto fuera del primer periodo, debiéramos acordar lo mismo respecto del presupuesto y ley de hacienda para 1874, especialmente acerca del presupuesto, cuando sobre este punto milita muy terminantemente el art. 49 de la Constitución particular del Estado. ¿No sería esto el desorden y el verdadero desquiciamiento de la Administración pública?

Por otra parte, debe observarse que no se trata aquí de las facultades del Poder judicial, único, segun mi modo de entender el artículo 16 de la Constitución federal, respecto del cual puede tener aplicacion ese mismo artículo en lo relativo á competencia.

Recuerda el Sr. Castillo Velasco en su tratado de derecho Constitucional, las tropelías, las inauditas vejaciones de la policia en la época nefanda de D. Antonio López de Santa Anna, cuando los CC. eran constantemente molestados con las visitas domiciliarias del célebre Lagarde, Jefe de policia en la Ciudad de México, y cuando con ese motivo se procedia casi siempre sin justificación, á título de órdenes *verbales* que no se daban, ó que se eludían despues, sin previo aviso, sin el debido conocimiento de la autoridad judicial correspondiente. Los sabios Legisladores Constituyentes, dice el Sr. Castillo Velasco, tuvieron presentes tantos desmanes; y precisamente para evitarlos en lo de adelante, para hacer efectiva la libertad y ponerla á cubierto de los abusos de las autoridades *políticas y judiciales*, consignaron la garantía de que nadie pudiera ser molestado en su persona, intereses, domicilio y posesiones, sino en virtud de *mandamiento escrito* de autoridad competente, que fundara el motivo del procedimiento. Página 52 de la obra citada. El artículo 16 no puede ser aplicado por esto, á los actos legislativos.

Ademas, ese art. 16 de la Constitución, donde está consignada la garantía de que se trata, dice *mandamiento*; es decir, despacho del Juez, en el sentido jurídico, ó bien en el

orden político y administrativo, el precepto del superior intimado al inferior; pero de ninguna manera, ley ni disposición alguna de este género, que ni es despacho, ni supone jamás la relación genuina y propia de un superior á su inferior, sino la del Legislador que da la ley y la de súbditos que deben obedecerla; Legislador que hace uso de sus facultades de una manera *general y absoluta*, y de ningún modo en el sentido limitado y especialísimo de despacho judicial ó de orden superior en el ramo administrativo y político, que siempre se reduce á un caso dado y á personas determinadas.

Reasumiendo estas observaciones y fundamentos, entiendo que no procede el amparo:

1º: Porque no hay en la Constitución del Estado una prevención expresa, clara é intergiversable, para que el Congreso decrete las contribuciones que han de servir para cubrir los egresos del Estado, *solamente* en el primer periodo de sus sesiones.

2º: Porque la Constitución solo limita en este respecto lo relativo al presupuesto, dejando la facultad de decretar contribuciones para cubrirlo, tan amplia y absoluta, como la consignó al principio el art. 49.

3º: Porque si las ideas contrarias hubieran de militar cuando se tratara de un nuevo gasto y de un nuevo impuesto para cubrirlo, no puede suceder lo mismo en el presente caso, donde se trata de saldar el presupuesto general de los gastos del Estado, aprobado antes según la Constitución.

4º: Porque los inconvenientes que se seguirían de la práctica, aceptando la idea exclusivista de los que piden el amparo, son de mayor entidad, son mas nocivos á la marcha de la Administración y á la salud del Estado, que los que pudieran reseñarse adoptando las ideas que yo creo haber sólidamente fundado.

5º: Porque la contribución extraordinaria, aunque expedida en distinto decreto, se discutió y aprobó juntamente con la ley de hacienda, y es por lo mismo adicional ó com-

plementaria de esta. Si para la ley de hacienda hubo facultades, las hubo también para las adiciones: si no las hubo para estas, tampoco para la ley de hacienda, que como hemos visto, fué discutida, aprobada y publicada en el mismo 2º periodo de sesiones en que lo fué la contribución.

6º: Porque el art. 16 de la Constitución general no es aplicable á los actos legislativos, sino exclusivamente á los *mandamientos* de autoridades judiciales, á los despachos de Juez ó á las órdenes del poder político administrativo.

IV

Segundo fundamento del amparo.

La contribución extraordinaria, dicen los autores del amparo, ocupa nuestra propiedad sin nuestro previo consentimiento, y por lo mismo es atentatoria de la garantía que otorga el pacto fundamental de la República en su art. 27, que dice así:

“La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización.”

Este artículo absolutamente no es aplicable á nuestro caso; porque hablando de la *ocupación* de la propiedad, está muy distante de referirse á los actos legislativos, imponiendo contribuciones para los gastos de la administración, para la subsistencia de la sociedad, que realmente es la base y fundamento de las garantías individuales. ¿A donde fuéramos á tener si entendiendo por ocupación un decreto de contribuciones, hubiera necesidad de que, antes de expedir el decreto, el poder público indemnizara competentemente á todos y á cada uno de los contribuyentes?

V

Tercer fundamento del amparo.

El Ejecutivo dijo al Congreso, que bastaban los recursos decretados para cubrir el

presupuesto. Esos recursos han sido recaudados hasta el último centavo. ¿Por qué, pues, se tiene el déficit en las rentas públicas? O si realmente existe ¿cómo puede estar justificado? ¿Acaso la mala versación de los caudales del Estado, puede ser ni motivo para decretar nuevos impuestos, ni para volver á gravar á los contribuyentes con lo que ya tienen pagado? ¿No es esto atentatorio á las garantías individuales?

Expresándose así los quejosos al desarrollar el tercer fundamento del amparo, presentan, con calidad de prueba, varias noticias de las oficinas de hacienda del Estado, y un cúmulo de periódicos oficiales donde se encuentran decretos de la Legislatura y cortes de caja de la Direccion general de Rentas; llevando, á mi entender, el intento de arreglarle su cuenta á la administracion pública, para deducir, en consecuencia, que no ha podido existir el *deficit* que motivó la contribucion extraordinaria, ó que si realmente existe, no justifica el decreto, porque dimana la falta de la mala versación de los caudales del Estado.

Para entrar en este debate seria necesario saber cómo formaban la cuenta los peticionarios del amparo; lo cual, hasta ahora, no he visto yo en los presentes autos.

Noto además, que las noticias presentadas no estan completas, vienen truncas, pues solo encuentro las de algunas recaudaciones foráneas, faltando por completo las de la recaudacion de esta Capital, que son sin duda las mas importantes. En cuanto á las balanzas de la Direccion general de Rentas, no aparece la de Junio de 1873, encontrándose la de Enero de dicho año que no es del caso, por ser la que finalizó el período extraordinario de 5 de Octubre de 1872 á 31 de Enero de 1873, época en que dió principio el año económico de 1873, terminando en 31 de Enero de 1874. La balanza de este último mes tampoco existe; y por último, es de advertir que todos esos datos, aun suponiéndolos completos, se han presentado en el juicio despues del 21 de Mayo

próximo anterior, es decir, cuando había espirado el término probatorio, no obstante la próroga que el Juzgado tuvo á bien conceder.

Con esta falta, con datos tan incompletos, y sobre todo, sin oír en contrario á los representantes de la Administracion pública de Durango, ¿como se puede juzgar con exactitud? ¿como es posible ni siquiera formar un juicio aproximativo de lo que se quiere?

Es verdad que este mismo punto ha sido tratado por la prensa de esta Capital; pero primeramente es la prensa de oposicion, regularmente apasionada; y por otra parte, no entiendo yo que la rectitud de un fallo puede basarse, digo sólidamente, en las apreciaciones de un periódico político, por más que esté redactado con inteligencia, con verdad y con mesura.

Yo entiendo, además, que el Gobierno ha contestado satisfactoriamente á los cargos del periódico oposicionista, sobre todo si se tiene en cuenta las manifestaciones publicadas bajo el rubro X. Z. en el núm. 35 del periódico oficial del Gobierno, que no han presentado los quejosos, como no han presentado sus respuestas á dichas manifestaciones, tal vez porque su misma vaguedad está demostrando el acierto conque el Gobierno se produjo en el número citado. Como punto cardinal, se ha dicho por los que piden amparo, que basta el impuesto ordinario, que el déficit procede de mala versación, mientras que expresando el Gobierno que tiene presentada su cuenta general á la Legislatura, única á quien reconoce como Juez de esta materia, conviene, sí, en que baste el impuesto segun las bases de 1871; pero agrega, que hoy no puede suceder otro tanto, debido á las grandes rebajas que sin su acuerdo se han concedido por las juntas á los contribuyentes, especialmente á muchos de los que piden el amparo y cuya lista aparece en el núm. 35 del periódico citado, que yo presento. Si estos pues pagaron el impuesto del año pasado, no por las bases de 1871,

sino sobre las rebajas concedidas, algunas de ellas hasta el 40 % ¿como pueden decir que hoy se cobra extraordinariamente lo que ya se pagó por completo el año pasado? ¿como pueden quejarse de un impuesto que ellos mismos han hecho necesario con las rebajas de sus calificaciones, justas tal vez y muy debidas, pero que de hecho han debido producir una baja considerable en los rendimientos del impuesto?

Y precisamente para acreditar cual ha sido en el año pasado y cual es todavía la base de la contribucion ordinaria, base con la cual no es posible que se cubran los gastos del Estado, he presentado yo el periódico oficial que corre á fojas 1ª del cuaderno 3º de estos autos. En él se vé, que la contribucion importa \$123,870 25 cs., cobrándola sin dejar rezagos.

Agréguese lo que se quiera por ingresos accidentales, \$27,000, por ejemplo; pero como el presupuesto asciende hasta mas de \$180,000 anuales, forzoso es que las rentas tengan un déficit y déficit de consideracion, porque no bajará de \$30,000 al fin de cada año económico. Confirman esta verdad las disposiciones económicas que ha dictado últimamente el Gobierno, y que aparecen publicadas en el mismo periódico, á fojas 1ª del cuaderno 3º.

Pero la cuestion es otra; el punto cardinal del debate, tratándose del amparo, debe fijarse de muy distinta manera.

Por un momento, y solo por mera suposicion para discutir, convengamos en que la Administracion es delincuente. ¿Nos es lícito recidenciarla aquí, cuando tiene sus jueces naturales, que son el Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? ¿Y vamos á recidenciarla en materia tan delicada, sin oírle, sin citarla, sin que al menos se presenten datos suficientes, claros é irrecusables?

La Administracion es delincuente, vuelvo á decir; el déficit procede de un peculado horrible y suficientemente probado. Quiero mas todavia: ya está declarado que el Go-

bierno delinquirió. Pregunto ahora.....¿No puede el Congreso decretar una contribucion extraordinaria para cubrir ese déficit? ¿Quien se lo impide? ¿El Gobierno que faltó á sus deberes? No. ¿La Constitucion? Tampoco. Y en este caso, que es el único de nuestra cuestion, ¿dónde está la garantía violada? ¿Dónde está el artículo constitucional que se ha infringido?

Desengañémonos: esa cuestion delicada del déficit, ó sea de los motivos que lo hayan causado, no es de la competencia del Juzgado de Distrito, ni menos puede ser fundamento para el amparo que se ha pedido. Dejémosle en su derecho á las autoridades del Estado, para que siéndoles presentada la cuenta de la Administracion pública de Durango, ellas resuelvan en justicia y constitucionalmente; pero entretanto, yo por lo menos, me aparto enteramente de las apreciaciones que en este punto se hacen para pedir el amparo:

1º Porque los datos presentados no son suficientes, y ademas están exhibidos fuera de término.

2º Porque entiendo que no corresponde al Juzgado de Distrito la dilucidacion de este punto.

3º Porque juzgo satisfactorias las respuestas del Gobierno en el periódico oficial núm. 35.

4º Porque nadie puede ser juzgado sin previa citacion y audiencia.

5º: Porque veo necesidad y justificacion en el decreto que impone la contribucion extraordinaria.

6º: Porque todavia, aún faltando esa justificacion, no encuentro que se haya violado ninguna de las garantías individuales.

VI

En virtud de las consideraciones expuestas, el Administrador de Correos de esta Capital, que lleva la voz fiscal, es de opinion: que no se debe otorgar el amparo que algunos vecinos de esta Capital han pedido con-

tra el decreto de 11 de Abril próximo pasado, que expidió la Legislatura del Estado, imponiendo un arbitrio extraordinario para saldar el presupuesto ordinario de la Administración pública.

Durango, Agosto 8 de 1874.—*Arcadio Herrera.*

Es copia. Durango, Agosto 30 de 1874.—*Arcadio Herrera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Agosto 19 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Rafael Pescador, en representación de varios propietarios y comerciantes, contra el decreto número 47 fecha 14 de Abril del corriente año, expedido por la Legislatura del Estado, y por el que se estableció una contribución extraordinaria; y contra el consiguiente cobro que de dicha contribución trató de hacer efectivo el C. Recaudador especial nombrado al efecto. Visto lo pedido por el Ministerio Fiscal; las constancias de autos, y cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando: que de algun tiempo á esta parte se notan marcados ahincos por enarbolar en la República Mexicana cierta bandera política, que por la exageración de principios, acabará por ocasionar una revolución de funestas trascendencias para la paz y el orden público.

Que los principios que con mengua del derecho constitucional han sido constantemente exagerados, son, primero: que los Estados de la gran Confederación Mexicana son soberanos; con una soberanía absoluta, segundo; que todo lo que atañe al régimen interior de los Estados, no entra en el dominio de la Justicia Federal y todo lo que sea intervenir en ello, es invadir ó atacar la soberanía de los mismos.

Que como dice un sabio publicista americano, "La exageración de la soberanía de los Estados, será siempre un peligro para la Federación, que acabará por desaparecer en

medio de torrentes de sangre, el día en que se relajen los vínculos que forman la Unión, que bajo otro nombre se conoce por Federación."

Que por eso este Juzgado tiene que establecer en defensa de los intereses federales que le están encomendados, la siguiente proposición: "La soberanía de los Estados no es absoluta, sino tan solo relativa y en gran manera limitada."

Que la anterior proposición queda demostrada suficientemente, trayendo á la memoria, que la letra y espíritu de la acta constitucional de 31 de Enero de 1824 y la Constitución política, sancionada el 4 de Octubre del mismo año, fueron las que crearon la soberanía de los Estados, con taxativas, restricciones y limitaciones, que en su mayor parte ha dejado subsistentes la Constitución de 1857, que es hoy la suprema ley de la Nación.

Que las ideas de lo absoluto y restringido, limitado con aplicaciones á un mismo objeto, son enteramente contradictorias.

Que en consecuencia, si los Estados en virtud del Pacto federal, se encuentran limitados en sus facultades por la Carta fundamental de la República, no son desde luego, y como se ha querido suponer, soberanos con esa soberanía exterior y absoluta, sino con la interior, y la únicamente indispensable para que puedan conservar su personalidad en la Gran Confederación Mexicana.

Que en cuanto al principio que se asienta, que en lo que toca al régimen interior de los Estados no puede intervenir la autoridad federal, enunciado de una manera tan absoluta, es completamente falso y contrario á las prescripciones claras y terminantes del derecho constitucional.

Que para convencerse de la anterior verdad, basta leer el artículo 101 de la Constitución federal, en donde expresamente se determina, que corresponde á las autoridades federales, resolver toda controversia que se origine por leyes ó actos de cual-

quiera autoridad que violen las garantías individuales.

Que aseverar lo contrario, sería sacrificar los sagrados derechos del hombre, que son el fin, á las instituciones que son el medio, segun el artículo 1º de la Constitucion de 1857, en donde terminantemente se declara: *Que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales.*

Que sentados estos preliminares, es conveniente entrar de lleno en las importantes cuestiones que entraña el presente juicio de amparo.

Y en atencion á que este Juzgado ha observado constantemente en algunas de las autoridades locales del Estado, cierta susceptibilidad oficial mal entendida, y las mas veces innecesariamente esplicada, cuando en fuerza de su deber tiene que entrar en la decision de las diversas cuestiones, cuyo exámen le está cometido por la ley, en esta vez procurará hacerlo omitiendo apreciaciones que no vengan al caso, y que pudieran calificarse de apasionadas y ofensivas á aquellas mismas autoridades.

Que por consiguiente, en la presente sentencia se examinarán las diversas cuestiones que se han iniciado y defendido por los interesados, en el trascurso de este juicio, de la manera mas abstracta que sea posible, aunque siempre sirviendo de antorcha las prescripciones del derecho constitucional, tanto general como particular del Estado.

Que precisadas las cuestiones que se desprenden de las constancias de autos, quedan formuladas de la manera siguiente: *¿Tiene la Legislatura del Estado facultad para imponer contribuciones extraordinarias? ¿cuales son las condiciones, y hasta donde se extiende esa facultad?*

Que antes de dar resolucion alguna sobre el particular, se hace necesario sentar dos proposiciones procedentes, que merecen el calificativo de principios, y que servirán para esclarecer de alguna manera los puntos que se ventilar.

Es la primera: "Son mas gravosas para los pueblos, las contribuciones extraordinarias, que los empréstitos." La razon es, muy sencilla: los empréstitos tienen la calidad forzosa de reintegrables; mientras que las contribuciones carecen de aquel requisito.

Segundo principio: La ley es una para todos, dice el artículo 5º de la Constitucion del Estado. *La autoridad solamente puede, lo que aquella expresa.*

Que esto supuesto, se hace preciso buscar en la Constitucion particular del Estado, las facultades que tenga la Legislatura para ver si en ellas está incluida la que se cuestiona.

Que el artículo 49 fracción 6ª de dicha Constitucion, dice á la letra: "Son facultades de la Legislatura.....6ª: Aprobar el presupuesto y decretar contribuciones para cubrirlo. En el primer periodo de sus sesiones, aprobará el presupuesto de los gastos del año siguiente, y en el segundo, examinará los cuentas de los erogados en el anterior.

Que en la enumeracion del anterior artículo, pudiera creerse que la palabra contribucion, abraza tanto las contribuciones que corresponden á tiempos ordinarios, como las que tienen el carácter de extraordinarias.

Que para esto es necesario advertir, como dice el Sr. D. José M. del Castillo Velasco en sus apuntamientos sobre el derecho: "que las necesidades de la sociedad de los hombres, son constantemente mudables." En efecto, unas veces son de perfecta paz; y en otras son tales las urgencias y gravedad de las circunstancias, que puede peligrar la paz y se altera de hecho el orden público establecido. Las primeras constituyen la situacion ordinaria de la Nacion ó del Estado; las segundas, las que se conocen con el nombre de extraordinarias y urgentes.

Que la Constitucion particular del Estado, lo mismo que la general de la República, tienen establecido el remedio á estas dos clases de situacion, y por consiguiente, á todas las necesidades que puedan sobreve-

nir. Para los casos ordinarios se dispuso en la fraccion 6ª citada, que se decretaran contribuciones; y para las exigencias extraordinarias é imprevistas se autorizó á la Legislatura en la fraccion 7ª, para que decretara empréstitos.

Que en ninguna de estas dos fracciones debe entenderse inválida la facultad de decretar contribuciones extraordinarias. No en la fraccion 6ª, porque por una parte refiriéndose esta á las contribuciones, para cubrir el presupuesto, y siendo este de gastos ordinarios y establecidos, deben de participar aquellas de la misma calidad. Además, la fraccion 7ª sería completamente inútil, si la facultad que en la 6ª se concede se extendiera en impuestos extraordinarios, porque siendo que con estos mismos impuestos podrian muy bien cubrirse las necesidades extraordinarias, á nada conducirían los empréstitos de que habla esta fraccion.

Que tampoco puede considerarse incluida la facultad que se discute en la fraccion 7ª, porque en esta se habla de empréstitos, cuando imperiosamente lo demuestran las circunstancias; y en primer lugar se ha demostrado ya, que no es lo mismo para los pueblos, empréstito que contribucion extraordinaria, supuesto que el uno tiene la calidad de reintegrable, mientras que la otra es una verdadera exaccion y carece de ese requisito. En segundo lugar, hay que luchar con la terrible prescripcion del artículo 5º ya citado de la Constitucion particular del Estado, el cual para poner dique á los desmanes en que pudieran incurrir las autoridades, ha determinado claramente *que aquellas solo pueden lo que la ley expresa*. Y por último, que es á toda luz notorio, que felizmente para la República y para el Estado, se está disfrutando de una época de paz y de pleno orden constitucional.

Quedan pues resueltas las cuestiones que este Juzgado se propuso examinar, de la manera siguiente:

“Primera: En circunstancias ordinarias, la Legislatura de un Estado no tiene facultad para imponer contribuciones extraordinarias.”

“Segunda: En el caso de que los empréstitos se confundan con las contribuciones extraordinarias, deben decretarse como en la misma ley se determina, *cuando imperiosamente lo demanden las circunstancias del Erario*.

Considerando: que para resolver una cuestion, no basta adoptar el medio de demostrarla directamente, sino que es necesario hacerse cargo de las objeciones que sobre el particular se vierten ó manejan.

Es la primera, que segun los artículos 21 fraccion 2ª de la Constitucion federal, todo habitante de la República, tiene obligacion de contribuir para los gastos públicos.

Segunda: Que el decreto contra el cual se ha pedido amparo, es meramente adicional de la ley de Hacienda, y que si para esta tuvo facultades de la Legislatura del Estado, las tendrá tambien para aquel decreto, que es su aclaracion.

Tercera: Que habiendo un déficit en las rentas del Gobierno á causa de la autorizacion que se le concedió por decreto de 15 de Diciembre de 1873, (fojas 11 cuaderno 2º) y comprometido como está el crédito del Ejecutivo, la Legislatura ha tenido facultades para proveer á esa necesidad.

Debe responderse á lo primero. Que es cierto que todo habitante del Estado se halla con la precisa obligacion de contribuir para los gastos públicos, y que á la Legislatura incumbe la facultad de presupuestar aquellos gastos, y decretar contribuciones para cubrirlos; pero tambien es cierto, que aquella obligacion y esta facultad tienen sus límites, tanto en su esencia como en la forma de su ejercicio, y que salirse de ellos, es girar fuera de la esfera que autoriza la Constitucion.

Que los límites de la obligacion de contribuir para los gastos públicos, están expresamente demarcados en los artículos 31

fraccion 2ª y 3ª de la Constitucion general, segun los que, "todos los habitantes así Mexicanos como extranjeros, deben contribuir para los gastos públicos de la Federacion y del Estado, y municipio en que residen, *de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.*"

Que por otra parte, no será por demas consignar en esta sentencia las luminosas doctrinas del Publicista Mexicano de que ya se ha hecho mencion, el Sr. D. José M. del Castillo Velasco, quien en su obra de derecho ya citada, dice á la letra:

"No es sin duda este el lugar mas conveniente para estudiar todas las cuestiones relativas á contribuciones; pero que por lo menos sea lícito manifestar, que las contribuciones excesivas empobrecen á los pueblos, matan á la industria, y sofocan al comercio y á los capitales pequeños, haciendo odiosos á los Gobiernos y dando aliente y aun algun fundamento de justicia á las ocultaciones y á los fraudes, á los fraudes, que influyen poderosamente en los pueblos acostumbrándolos á no considerar la moralidad en el cumplimiento de las obligaciones, como la base del crédito, y como el cumplimiento de un deber para con la sociedad y para con el hombre. Es una verdad universalmente reconocida, que las contribuciones excesivas, lejos de aumentar los ingresos en el Erario, los disminuyen considerablemente. Y *ademas de todo esto, el exceso en las contribuciones, constituye un agravio á la justicia y al derecho individual. Si el hombre tiene la obligacion de contribuir á los gastos públicos, su obligacion tiene tambien un límite y es aquel en que la contribucion lo perjudica, porque se asocia con los demas hombres, no para ser perjudicado, sino por el contrario, favorecido.* Así es que las contribuciones nunca deben exceder del término ó límite que el Legislador conceptúe que es soportable para las diversas clases de los contribuyentes.

¿Como se conoce ese límite? Con la simple observacion del resultado de las contri-

buciones existentes y de la opinion pública. Este criterio es el mas seguro. Si él demuestra que las contribuciones no pueden llegar al valor que representa el presupuesto, la razon natural y la conciencia exigen que el presupuesto se disminuya hasta donde sea necesario, porque es en verdad preferible carecer de algo en la Administracion pública, á crear deficientes y deudas que aumenten año por año, hasta acabar con el crédito público y poner en peligro á las instituciones y á los Gobiernos.

Y al hablar de los impuestos extraordinarios, dice mas adelante: No siempre bastan los recursos ordinarios para las atenciones urgentes ó tal vez imprevistas de la sociedad, y en esos casos es indispensable ocurrir al crédito para procurárselos; mas como en tales circunstancias la urgencia ó la gravedad de ellas, suelen inspirar la imposicion de gravámenes que serian insoportables y dañosos para la República, la Constitucion ha evitado el daño y la precipitacion que pudiera originarlo, dando en la fraccion 8ª facultad al Congreso, para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nacion, para aprobar esos mismos empréstitos, y para reconocer y pagar la deuda nacional. La Constitucion ha sido tan rigurosa en este punto, que dispone que el Congreso no solamente dé las bases para que el Ejecutivo celebre el empréstito, sino que ha de aprobarlo despues.

A la segunda objecion deberá decirse, que ninguno de los artículos del decreto referido expresa que sea una mera adiccion á la ley de hacienda, y que por otra parte, aquel decreto establece un recaudador especial, que en virtud de sus facultades ha exigido y está exigiendo dicho impuesto, mientras que el C. Director de Rentas por su lado, recaba el pago de las contribuciones ordinarias. Y lo ordinario y lo extraordinario por consiguiente, se excluyen mutuamente.

Para responder á la tercera objecion, es conveniente advertir, que como el Congreso

congreso constituyente del Estado, al expedir la fracción 6ª del artículo 49, la aprobó sin haber precedido discusión alguna, es necesario recurrir á la práctica que observa el Congreso general, que como debe suponerse, es formado por la parte mas ilustrada de la Nación.

Aquella respetable corporacion, al aprobar el presupuesto de gastos para cada año fiscal, tiene siempre muy presente el caso de que las contribuciones que se decretan no sean bastantes para cubrir aquel presupuesto, y lejos de ni siquiera indicar que se pueda hacer uso de impuestos extraordinarios, autoriza al Ejecutivo para que disminuya en proporcion los gastos acordados.

Por todas las consideraciones que acaban de esplanarse y los fundamentos que en su apoyo se han aducido, el C. Juez propietario de Distrito, Gerónimo Sida, declara:

Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege contra el decreto número 47 fecha 14 de Abril del corriente año, expedido por la Legislatura del Estado imponiendo una contribucion extraordinaria y contra el cobro de dicho impuesto, á las personas siguientes: Sres. Castillo hermanos, Delius hermanos, Francisco Laborde, Juan Arana, Juambelz hermanos, Vazquez hermanos, Manuel P. Gavilan, Fermín Amezaga, Matias Cordero, José María Fernandez Leal, Luciano Lopez, Genaro Rios, Luis Peña, Juan de Dios Palacio, Juan Castillo por Santa Elena, Marcos Ison, Jesus Saucedo, Andres Basterra, Felipe P. Gavilan, Pedro Peyro, Juan N. Flores, Jesus Rios, Miguel Aguilar, Pablo Reynosa, Pedro del Rio, Felipe Flores, Benito Moreno, José M. Laurenzana, German Stalknecht, Joaquina C. de Peña, Antonio Perez, Juan Fernando Flores, Francisco Villascñor, Julio Hildebrand y Cª, Francisco Alvarez y Cª, Rafael Bracho, Alejandro Falfan, Eusebio Istolaza, Pedro Alvarez, Lonré hermanos, Leonardo Treviño, C. Mancillas y Cª, Rafael Vazquez, Antonio

TOMO VI.—PARTE II.

Muguero, Ramon Avila, Bernardo de la Torre, Hugo Dorman, José Corrales, Rafael Barrera, Fructuosa Ramirez, José M. Polanco, Basilio Guerrero, Dª María de Jesus Rodriguez de Camacho, Dª Luisa Ortiz, Feliciano Contreras, Gil Hernandez, Lino Rivas, Ignacio Manzanera, Juan W. Ball, María Ascencion Rescendez, Telésforo Lazalde, Juan Fuentes, José M. Lazalde, Rafael Vazquez por intestado de Gutierrez, el mismo por Elias Larave, Francisco Rodriguez, Jorge María Palacios, Hilario Zurita, Juan Reyes, José Antonio Diaz Melero, Manuel Fernandez, Julio Rodriguez, José Loreto Rodriguez, Serafin Campos, Martin Zubaria, José María Alvarado, Rafael Muguero, Roman Mendez, Felipe Rispedro, Refugio Legaspi, Severiano Morán, Juan Bernal, Francisco Valenzuela, Rafael Campos, Joaquin Rodriguez, Carlos Chavez, Andres Castelo y Basilio Ramirez.

Segundo: Remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision, y sáquense las copias correspondientes para la Redaccion del "Semanario Judicial."

Y por este auto definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó el expresado C. Juez por ante mí. Doy fé.—*Gerónimo Sida*.—*J. B. Arellano*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 9 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por los CC. Castillo hermanos, Delius hermanos, Francisco Laborde, Juan Arana, Juambelz hermanos, Vazquez hermanos, Manuel P. Gavilan, Fermín Amezaga, Matias Cordero, José Mª Fernandez Leal, Luciano López, Genaro Rios, Luis Peña, Juan de Dios Palacio, Juan Castillo, por Sta. Elena, Marcos Ison, Jesus Saucedo, Andrés Basterra, Felipe P. Gavilan, Pedro Peyro, Juan N. Flores, Jesus Rios, Miguel Aguilar, Pablo Reynosa,

Pedro del Río, Felipe Flores, Benito Moreno, José M^a Laurenzana, German Stalknecht, Joaquina C. de Peña, Antonio Perez, Juan F. Flores, Francisco Villaseñor, Julio Hildebrand y C^a, Francisco Alvarez y C^a, Rafael Bracho, Alejandro Falfan, Eusebio Istolaza, Pedro Alvarez, Lonrre hermanos, Leonardo Treviño, C. Mancillas y C^a, Rafael Vazquez, Antonio Muguiro, Ramon Avila, Bernardo de la Torre, Hugo Dorman, José Corrales, Rafael Pescador por las haciendas de Juan Perez, Rafael Barrera, Fructuosa Ramirez, José M^a Polanco, Basilio Guerrero, Maria de J. Rodriguez de Camacho, Luisa Ortiz, Feliciano Contreras, Gil Hernandez, Lino Rivas, Ignacio Manzanera, Juan W. Ball, Maria A. Rescendez, Tolésforo Lazalde, Juan Fuentes, José M^a Lazalde, Rafael Vazquez por intestado de Gutierrez y por Elias Larave, Francisco Rodriguez, Jorge M. Palacios, Hilario Zurita, Juan Reyes, José Antonio Diaz Melero, Manuel Fernandez, Julio Rodriguez, José L. Rodriguez, Serafin Campos, Martin Zubiria, José M^a Alvarado, Rafael Muguiro, Roman Mendez, Felipe Rispedre, Refugio Legaspi, Severiano Meráz, Juan Bernal, Francisco Valenzuela, Rafael Campos, Joaquin Rodriguez, Carlos Chavez, Andrés Castelo y Basilio Ramirez, contra los procedimientos del C. Recaudador de la contribucion extraordinaria impuesta por la Legislatura en su decreto número 47, con el cual, en opinion de los solicitantes, se han violado las garantías consignadas en los arts. 16 y 27 de la Constitucion Federal; vistas las pruebas y alegatos presentados por los promoventes; el parecer fiscal; el informe de la autoridad responsable, la sentencia del Juez de Distrito y

Considerando: 1º Que es una facultad natural de los cuerpos legislativos, la de atender por medio de los impuestos á los gastos de la administracion pública, facultad consignada en términos expresos en la Constitucion del Estado de Durango en su art. 49, frac. 6º

Que no existe límite alguno á esa facultad en dicha Constitucion, pues claramente se deduce del texto del artículo citado, que la obligacion de votar el presupuesto en un tiempo determinado, no se refiere en manera alguna á las contribuciones, y que el nombre de extraordinarias con que la Legislatura del Estado califica las decretadas en 14 de Abril del corriente año, solo puede significar la voluntad que ha tenido el Legislador de privarlas del carácter de permanentes que tienen las ordinarias; lo cual favorece á los contribuyentes. Que siendo por estas razones, competente el Congreso de Durango, no ha habido en el caso que provocó la interposicion de este recurso, ataque á las garantías consignadas en el art. 16 citado.

2º Que la facultad á que se refieren las consideraciones anteriores, tiene por objeto hacer efectiva la obligacion impuesta por la Carta política del país, á los habitantes de la República, de contribuir para los gastos públicos; y nunca ha podido decirse, sin gravísima ofensa del buen sentido y de la disposicion de la ley, que el cobro de un impuesto, debidamente decretado, importe la ocupacion de la propiedad de que habla el art. 27 de la Constitucion.

Que en consecuencia, el Erario del Estado de Durango no ha podido ser privado de los productos de la contribucion extraordinaria á que se refiere este juicio, sin punible atentado á su soberanía constitucional.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara:

1º Que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito que concedió amparo á los individuos arriba mencionados.

2º Se impone á los solicitantes la multa de quinientos pesos, á cuyo pago están obligados mancomunada y solidariamente.

3º El Presidente de la Corte, con acuerdo del Tribunal Pleno, suspende al Juez de Distrito del Estado de Durango, quedando este consignado al Tribunal de Circuito.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, en cuanto al primero y tercer punto, y por mayoría en cuanto al segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Luza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velásquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 14 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por los CC. Juan Antonio y Pedro Aguirre, contra los procedimientos del Alcalde 2º de Aldama, que los despojó por medio de la fuerza armada, de la posesion de una mina de que eran denunciantes.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En mi dictámen de 19 de Junio de este año, al tratarse de la prévia suspension del acto reclamado, dije lo que sigue:

"El C. Antonio Aguirre, por si y á nombre de su hermano Pedro del mismo apellido, ha ocurrido pidiendo amparo á la Justicia federal, por creer violadas en su persona, las garantías que otorga la Carta fundamental de la República, pidiendo á la vez, se mande suspender previamente el acto reclamado: aunque en el escrito de queja no se expresa con claridad cual es la ga-

rantía violada, parece ser la que concede el artículo 27 de la Constitucion federal; parece tambien por la redaccion del escrito, que los quejosos se limitan á solicitar la suspension del acto reclamado, mientras se concluye un juicio que han entablado ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pedido informe á la autoridad ejecutora del acto reclamado, que lo es el Juez 2º de 1ª instancia del Canton Aldama, este lo ha rendido, y por vía de justificacion, aunque sin pedírsela, remite el expediente del juicio civil, que se ha seguido entre los quejosos y el C. Rafael Gameros, y en el que se ventila un interdicto de recuperar la posesion de la mina Santa Eduwigis. Examinado por el que lleva la voz fiscal este expediente, ha visto: que en efecto, se ha seguido por todos sus trámites, un juicio civil entre las partes contendientes y en el cual ha recaído sentencia definitiva, de la que apelaron los quejosos, concediéndose la apelacion con consulta del letrado, en solo el efecto devolutivo; como consecuencia de esta sentencia, el C. Rafael Gameros entró en posesion de la mina, ó lo que es lo mismo, el Juez que la pronunció la ha ejecutado, á reserva de lo que determine la Sala 2ª del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al sustanciar el recurso de apelacion interpuesto, y concedido en uno de sus efectos."

Esto fué lo que manifesté en mi anterior dictámen, pidiendo se declarara no proceder la prévia suspension que se solicitaba, y así tuvo á bien determinarlo ese Juzgado, disponiendo se pidiese de nuevo informe á la autoridad ejecutora del acto reclamado, á fin de sustanciar el juicio en lo principal.

Esta autoridad rindió ya el informe pedido, en el que viene reproduciendo las razones que anteriormente tiene alegadas.

El que lleva la voz fiscal pidió se abriese el juicio á prueba, lo que fué concedido por decreto de 18 de Julio de este año. En 6 del corriente, se dió por terminado este término, sin que los quejosos hubiesen rendido algunas, ni presentado su alegato, no obs-